

Nueva Sociedad Nro. 158 Noviembre-Diciembre 1998, pp. 28-39

El Salvador. Transición y procesos electorales a fines de los 90

Carlos Guillermo Ramos

Carlos Guillermo Ramos: sociólogo salvadoreño, investigador de Flacso, sede El Salvador.

Palabras clave: situación política, elecciones, Arena, FMLN, El Salvador.

El Salvador se prepara, en un clima de rupturas y agitación partidaria, para entrar en la ruta electoral de 1999 donde se deberá elegir a la nueva administración gubernamental responsable de liderar las políticas de desarrollo nacional frente a los retos del nuevo siglo. Desde comienzos de 1998, no ha sido difícil constatar la tendencia a un progresivo predominio de las agendas preelectorales de los partidos sobre las necesidades propias del proceso de fortalecimiento de las instituciones del Estado, y sobre los temas prioritarios lanzados a la discusión por diversos actores sociales vinculados al desarrollo nacional. Las encuestas de opinión han permitido, a su vez, percatarse de un persistente desencanto ciudadano de los liderazgos y los partidos políticos, una acentuación de la sensación de inseguridad ciudadana y un casi estable bajo nivel de confianza en las instituciones.

El contexto global

Cuando se analizan las dinámicas que han caracterizado al proceso político de los 90, deben señalarse los Acuerdos de Paz de 1992 que derivaron en las más novedosas y profundas transformaciones jurídico-institucionales y en la reconversión de los escenarios y actores sociopolíticos de El Salvador. Cambios todos orientados a la desactivación de la guerra y a la generación de condiciones democráticas de gobernabilidad. En materia política, al menos tres elementos adicionales al contenido formal de los acuerdos deben tomarse en cuenta para comprender de mejor forma el clima heredado del proceso de transición y los desafíos que se plantean en el actual contexto preelectoral de 1998.

1) Por encima de los propósitos explícitamente formulados en el pacto de paz, la nueva situación también indujo a que las expectativas ciudadanas de una superación del temor e inseguridad prevalecientes durante el conflicto, así como

de participar de los dividendos de la paz, se sobredimensionaran y se evadiera de este modo una consideración objetiva acerca de la conflictividad e incertidumbre que acompañan a todo tránsito político. De esta forma, las potenciales frustraciones en el proceso de transición y en las posteriores dinámicas electorales, estuvieron desde un inicio alimentadas doblemente por la complejidad del proceso y las sobreexpectativas generadas con la llegada de la paz¹.

En este orden, a casi ocho años de la firma del pacto, la demanda de seguridad ciudadana desde mediados de los 90 pasó a ser la principal preocupación de acuerdo a las encuestas de opinión pública; la expectativa de bienestar despertada con el clima de paz tampoco se refleja en las percepciones auscultadas, y algunas demandas por parte de grupos específicos asociados al desarrollo de la guerra –como son los excombatientes y patrulleros– siguen presentes en el escenario político.

En lo que a la inseguridad corresponde, si bien su fuente ha dejado de ser el enfrentamiento político y se ha desplazado a la incidencia delictiva, su influencia sobre la subjetividad y conducta de los ciudadanos sigue siendo grande. Y no es para menos: los datos oficiales sobre delincuencia en los últimos años de la transición pactada arrojaban un promedio de 8.000 homicidios dolosos anuales. En 1995, por ejemplo, la Fiscalía General de la República reportó 8.485 homicidios dolosos, 16.182 lesiones, 126 secuestros, 3.650 amenazas y 1.666 violaciones sexuales. Para 1996 la misma institución contabilizó 8.047 asesinatos, que en 1997 llegaron a 8.281. Este último año, estudios de instituciones nacionales e internacionales catalogaban a El Salvador como el país con el índice de violencia urbana más alto de América Latina². No hay duda de tales índices de criminalidad, que de mantenerse estables dejarían durante los años 90 más víctimas mortales que las causadas por 12 años de guerra, y que ayudan a explicar algunas frustraciones ciudadanas en el proceso de cambios y la escasa confianza en las elites del sistema político y los operadores de justicia.

2) Otro factor que ha permeado el proceso y hoy sigue pesando es la inercia del carácter en esencia político de la transición: sus componentes fundamentales se orientaron a generar reformas en la superestructura jurídico-institucional, y sus actores protagónicos se definieron sobre todo en el ámbito partidario. De tal forma que, frente a su papel relativamente marginal en muchos de los problemas centrales de la década de los 80, una meta prioritaria de la transición fue la afirmación de la primacía de los partidos en la titularidad de conducción del proceso político³.

¹ Carlos Guillermo Ramos: «Transición, Jóvenes y Violencia» en América Central en los 90: problemas de juventud, Flacso-El Salvador, 1998.

² La Prensa Gráfica, 1/6/98, p. 10; y José M. Cruz y Luis González: «Magnitud de la violencia en El Salvador» en Estudios Centroamericanos ECA, 10/1997; para 1997: ludop: Boletín de Prensa año MI N° 5; Estudio Activa, OPS-ludop: Caso del Gran San Salvador 8/1997.

³ Carlos G. Ramos: «Elecciones, transición democrática y participación ciudadana»; en FLACSO en El proceso electoral 1994, Flacso-El Salvador, San Salvador, 1995, p. 219.

Este necesario proceso de relevar el perfil y función de los partidos, empero, indujo sus propias dinámicas y conflictos, muchos de los cuales aún no encuentran un desenlace definitivo. Al instalarlos en el centro del escenario, los retos y dilemas planteados a estas agrupaciones, así como las nuevas reglas y condiciones políticas para la contienda, los rebasaron en su capacidad de procesarlas y de adecuarse a ellas con oportunidad. Ingresaron en la transición con una serie de conflictos acumulados en los 80 y un sensible déficit de institucionalidad, cosa que impidió no solo relanzar su legítimo protagonismo, sino también «hacerse cargo» con eficacia de la administración del mismo, profundizando sus debilidades, vacíos y contradicciones. En definitiva, el momento político que más demandaba definiciones y acciones partidarias sólidas y coherentes, se constituyó en el escenario de mayor erosión y conflictividad.

Resumidamente, la camisa de la transición les quedó demasiado grande a los partidos y –anclados en sus conflictos– poco han hecho hasta hoy por fortalecer su organicidad como paso indispensable para contribuir a la consolidación democrática. Las contiendas electorales de 1994 y 1997 y la actual coyuntura preelectoral son el mejor escenario para observar la escasa institucionalidad de sus espacios de decisión y órganos de resolución de antagonismos intrapartidarios. En este último caso, después del Partido Democrático Cristiano (PDC), que en los últimos 15 años ha hecho una tradición de sus fraccionamientos, el ex-frente guerrillero FMLN ha sido el partido en que más públicamente se han podido observar las luchas internas de poder y la fragilidad de su unidad organizacional e ideológica.

La segunda consecuencia importante en que se tradujo el carácter político de la transición fue la escasa incorporación de los diversos actores y movimientos sociales al proceso de transformaciones. Ello no podía ser de otra manera, pues los componentes económicos y sociales incorporados en los acuerdos, que pudieron haber sustentado una vigorosa participación de los actores sociales, fueron el área menos desarrollada y consistente del cuerpo de compromisos políticos y, a su vez, se perfilaron no como elementos para la superación de los conflictos generados por la secular exclusión social, sino como un «factor de estabilidad» para garantizar la viabilidad del proceso de pacificación⁴.

En este orden, el único intento por diseñar y crear un canal institucionalizado que permitiera a algunos sectores de la sociedad involucrarse en la discusión de los problemas propios de la etapa de transición fue el Foro para la Concertación Económica y Social, que contaría con la participación de trabajadores, empresarios y funcionarios de gobierno. Sin embargo, el escaso apoyo para establecerse y consolidarse condujo a que esta prometedora instancia de concilio

⁴ Carlos G. Ramos: «El Salvador: en el incierto camino de la gobernabilidad democrática», Cuaderno de Trabajo N° 11, Flacso-El Salvador, 9/1996, p. 11.

desapareciera sin dejar una herencia de peso para el futuro⁵. Su más importante fruto es una serie de reformas a la legislación laboral que, previo a su aprobación legislativa, fue reformulada por el Órgano Ejecutivo, alterando buena parte de los consensos logrados al interior del Foro.

En suma, este segundo factor decisivo del proceso significó no solo una profundización de los conflictos partidarios, sino también una fuerte restricción para diseminar en el cuerpo social la nueva lógica de convivencia política contenida en los acuerdos.

3) El tercer elemento condicionante ha sido la revaloración y concentración de procesos electorales. En torno a lo primero, el proceso post-acuerdos significó para las fuerzas políticas una ratificación de las elecciones como el único instrumento válido para conquistar o retener cuotas del poder político gubernamental, mientras que para el resto de las fuerzas sociales activas, las elecciones se perfilaron como el escenario exclusivo afín a la legitimación ciudadana de las transformaciones transicionales⁶.

En cuanto a lo segundo, apenas concluido el cronograma de cumplimiento de los acuerdos de paz, El Salvador se instaló en un concentrado periodo de procesos electorales. Entre 1996, de preparación para los comicios de principios de 1997, y el año 2000, deberán registrarse tres eventos electorales, dos legislativas y municipales y una presidencial. Este apretado calendario del segundo quinquenio de los 90 ha generado diversos fenómenos. En el escenario de los partidos ha llevado a una sobredeterminación de las preocupaciones estrictamente electorales por encima de las responsabilidades de definir prioridades y discutir la agenda de los problemas nacionales; en el escenario de los ciudadanos, en cambio, parece haber inducido a una sensación de saturación electoral y a una mayor erosión de este instrumento participativo como mecanismo idóneo para resolver la situación del país. Los niveles de abstencionismo que en la última elección de 1997 rondaron el 50 del total de votantes potenciales y los resultados de diversos sondeos de opinión política realizados, parecen indicarlo. La situación planteada para 1999 no da indicios de que tal fenómeno pueda revertirse, sino que por el contrario tiende a profundizarse. En tal sentido, las publicitadas crisis y luchas de poder al interior de los partidos más importantes, que en los últimos meses han adoptado altos niveles de polarización, se perfilan cada vez más como resortes desmotivadores para la participación electoral ciudadana.

⁵ La operativización del compromiso de creación del Foro de Concertación, «no solo fue objeto de una prolongada demora, sino que su promoción y desarrollo no contó con los apoyos necesarios de los protagonistas del proceso. Fue, más bien, uno de los acuerdos 'olvidados' por las partes» (Carlos G. Ramos: «Elecciones, transición democrática» citp. 220).

⁶ Carlos G. Ramos: «La evolución de los movimientos sociales» en VVAA: *De los acuerdos de Chapultepec a la construcción de la democracia*, Flacso-El Salvador / Woodrow Wilson Center, San Salvador, 1998; y «Elecciones, transición democrática...», cit.

Elecciones y transición

Las primeras elecciones de la transición se realizaron en 1994. El trascendental contexto en que se llevaron a cabo, como sus implicaciones en términos de apertura del sistema político y de modificación de la correlación de fuerzas en las instituciones del Estado, condujeron a que muchos las consideraran como «las elecciones del siglo» –y en algún sentido lo fueron.

Sin embargo, estas primeras elecciones en situación de paz, se perfilaron más bien como el último acto de la guerra. Ello al menos desde dos puntos de vista. En primer lugar porque desde la firma de la paz, el contexto electoral sirvió para reanudar y reeditar los discursos y debates políticos heredados del conflicto militar. Los mismos epítetos y acusaciones, los mismos términos incriminadores y descalificadores, con el beneficio del cese al fuego. Las elecciones se plantearon, así, como una especie de pretexto político para librar la última batalla. Por desgracia, los términos en que se estableció la contienda no se agotaron en el discurso. La intimidación y eliminación física de dirigentes de izquierda con anterioridad al evento dieron muestra del profundo arraigo de la cultura de la guerra en las pautas de conducta de sectores activos en el proceso.

En segundo lugar, las elecciones de 1994 también se perfilaron como el último acto de la guerra en tanto sus resultados reflejaron la correlación de fuerzas que el conflicto había dejado. Las cuotas de poder político institucional derivadas de los comicios expresaron más la herencia acumulada en la guerra que un resultado del desempeño de las elites políticas en la transición y de la credibilidad ciudadana en el sistema. Si los acuerdos fueron una tasación o avalúo de la correlación de fuerzas existente que permitió convertir las fortalezas y apoyos acumulados en bonos políticos para la transición, los comicios se constituyeron en el escenario idóneo para transformar estos heredados bonos militares en efectivas cuotas de poder institucional.

Tres años más tarde, los comicios legislativos y municipales de 1997 abrieron el periodo de mayor saturación electoral. En términos estrictos, estas elecciones fueron las primeras que se verificaron en un nuevo marco de discusión política y de reordenamiento de fuerzas y de alianzas. Si bien la campaña propagandística de Arena (Alianza Republicana Nacionalista) incorporó el visceral discurso anticomunista sostenido durante buena parte de la guerra, su dosis fue mucho menor y su impacto en la subjetividad ciudadana se perfiló como contraproducente en un electorado cansado y reacio a recordar el conflicto. El fenómeno que sí experimentó una evidente agudización fueron la crisis y las disputas al interior de los partidos. Ni Arena, con una larga tradición de administrar privadamente sus conflictos, escapó a este fenómeno, cuando viejos dirigentes desconocieron a la dirección y terminaron afiliándose a otra organización. Tales crisis habían sido ya acentuadas tras las elecciones de 1994 y, en algunos casos, como el del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), habían derivado en importantes fracturas o en distanciamientos de cúpulas. Sin embargo, las dimensiones asumidas frente al nuevo evento de 1997 y su irrupción pública

plantearon serios dilemas sobre la representatividad de las dirigencias y desestimularon la participación electoral, como pudo constatarse en los indicadores electorales de ese año.

Con todo, sin duda tras las elecciones de 1997 El Salvador cambió notablemente en lo que a la correlación de fuerzas políticas corresponde. Los resultados sobrepasaron las estimaciones más optimistas de la oposición, que apostaban a un notable desplazamiento del partido en el gobierno. Su derrota en buena parte de los municipios más importantes del Gran Área Metropolitana –incluida la capital– como en diversas cabeceras departamentales, y la sensible disminución de sus escaños legislativos, fue más de lo que la oposición y en especial el FMLN esperaban. De los 84 legisladores que componen la Asamblea, por ejemplo, Arena obtuvo 28 –frente a 39 que poseía en la anterior–, mientras el FMLN se agenció 27 diputados –con lo que habría ganado 6 más que los obtenidos en 1994, sin tomar en cuenta que 7 de los electos ese año abandonaron el partido al fraccionarse un sector que se constituyó en el Partido Demócrata (PD). Otros partidos también experimentaron oscilaciones significativas en sus cuotas de poder: el PDC (Partido Demócrata Cristiano) pasó de 18 a 7 diputados –más 3 que consiguió en coaliciones regionales con el Partido Demócrata–, y el PCN (Partido de Conciliación Nacional) subió de 4 a 11 diputados.

En términos generales puede decirse que las elecciones de 1997 constituyeron la primera prueba de fuego a que se sometió tanto el nuevo sistema electoral como el de partidos que se venía reconfigurando de forma caótica desde los acuerdos de paz. Lo más importante en lo que al sistema electoral compete es que, si bien el contexto de la campaña política se convirtió en una concentrada coyuntura de sucesivas y polémicas modificaciones a la ley electoral, promovidas por el bloque de la derecha aprovechando la correlación positiva de legisladores con que contaban en ese momento, y orientadas a disminuir los márgenes de incertidumbre que les planteaba el evento, los resultados mostraron un balance positivo. Y ello no porque hayan derivado en determinada modificación de las correlaciones de poder, sino porque fueron un paso clave en el fortalecimiento del principio de la alternabilidad como elemento fundamental del sistema democrático en construcción, y no un motivo para impulsar acciones extralegales como habrían sido en el pasado reciente.

Por su parte, en lo que al sistema de partidos corresponde, el balance se inclinó a ser más negativo que positivo. Entre otras cosas, porque algunos de los partidos –entre ellos Arena, el Demócrata Cristiano y el Demócrata–, terminaron el evento con mayores conflictos que los que poseían al comienzo. Pero lo más destacado es que las organizaciones no aprovecharon lo suficiente la oportunidad electoral para hacer más cercanos y creíbles sus planteos y liderazgos frente al ciudadano, así como para persuadir a los votantes de la importancia del instrumento electoral. La efectiva reducción de votantes entre los años 1994 y 1997, pese al crecimiento del número de ciudadanos carnetizados, fue en buena medida resultado de este débil esfuerzo por construir credibilidad y ampliar espacios de representación. El

fenómeno es de tal envergadura que el comportamiento de los votos válidos entre esos dos eventos muestra una merma del 16,7%.

Hacia la última elección del siglo

Sin que pasaran del todo los traumas partidarios causados por la elección de 1997, El Salvador entró desde los primeros meses de 1998 en una nueva ruta electoral que deberá decidir la conformación de una nueva administración cuyos retos serán grandes y múltiples. Entre éstos, la institucionalización de la democracia como vía de consolidación de la gobernabilidad, y la adopción efectiva del liderazgo en el diseño y promoción de las políticas de desarrollo que hagan frente a los desafíos del nuevo siglo, se plantean como los estratégicos. Hasta hoy han sido dos de los déficits más importantes en el proceso político desde los acuerdos de paz.

Fueron varios, entre otros, los temas relevantes que concentraron la agenda de la discusión pública en lo que va de 1998: el problema de la seguridad y del auge de la criminalidad; el prolongado y conflictivo debate legislativo para elegir un nuevo procurador de los Derechos Humanos, tras el fin del mandato de Marina de Avilés; y el proceso de consultas ciudadanas emanado de las iniciativas de la llamada Comisión Nacional de Desarrollo para enriquecer sus planteos formulados en el documento Bases para el Plan de la Nación. De los tres, la seguridad y la delincuencia fueron con certeza no solo el tema más permanente, sino también el más relevante en tanto implicó la participación de múltiples actores sociales y políticos y, además, se vinculó directamente a otras problemáticas, a saber: la entrada en vigencia de nuevas normativas penales consideradas por algunos como demasiado garantistas, la polémica reforma constitucional para incorporar la pena de muerte, y la pretensión de algunos sectores de poner el ejército en las calles para cumplir tareas de seguridad. Con todo, la dinámica política que ha observado 1998 ha dejado constancia de una clara y progresiva tendencia a que los escenarios y necesidades preelectorales vayan prevaleciendo o articulándose al resto de los procesos sociopolíticos.

Al concluir el tercer trimestre del año, a dos meses de iniciar de manera formal la campaña política, el condicionamiento preelectoral, y específicamente el proceso de definición de candidaturas presidenciales y fórmulas de candidaturas, ha pasado a ser el eje de la dinámica y ha detonado, una vez más, múltiples conflictos intrapartidarios. Obviando el caso del PDC, que desde 1989 ha hecho de los procesos electorales un escenario tradicional de conflictos y fraccionamientos; en la ruta de 1999 quienes primero han experimentado y publicitado sus pugnas internas han sido los dos partidos con mayores posibilidades de ganar: Arena y el FMLN.

El escenario de Arena

Los resultados electorales de 1997 obligaron a Arena a impulsar una serie de cambios en sus estructuras de dirección, como en ningún otro momento de su

historia. El desplazamiento de dirigentes de primer nivel del mando y la reestructuración de jerarquías en su nueva fracción legislativa fue la mejor expresión de la factura que se cobró a quienes se consideraba responsables de la derrota electoral. La llegada a los niveles superiores de nuevos rostros, entre ellos el conocido empresario Roberto Murray Meza, y luego el regreso del ex-presidente Alfredo Cristiani a la dirección del partido, hizo pensar en un reposicionamiento de los grupos internos que derivaría en una determinada estrategia de definición de candidatos. En concreto, se empezó a rumorear fuertemente sobre el relanzamiento de Cristiani a la contienda o, en su defecto, el impulso de una candidatura ligada a su grupo lo más posible. El mismo Murray Meza y Cecilia Gallardo de Cano, entonces ministra de Educación, figuraban entre los presidenciables.

En los primeros días de febrero, sin embargo, la definición de candidaturas asumió un rumbo inesperado cuando Francisco Flores, diputado presidente de la Asamblea Legislativa, anunció su intención de competir. Poco se había hablado de Flores como opción electoral y, hasta ese momento, su mayor virtud como figura pública había sido mantenerse relativamente al margen de los debates políticos más conflictivos. Su sorpresivo anuncio y su renuncia a la legislatura para impulsar una campaña interna dieron pie a declaraciones encontradas entre altos dirigentes de Arena que lo apoyaban, y que serían parte de un grupo cercano al presidente Calderón Sol, y otros que se esforzaban por subrayar la idea de que se trataba de una iniciativa personal que no respondía a decisiones del partido. Entre estos últimos que intentaron desestimar la candidatura de Flores destacaron el ex-presidente Cristiani y dirigentes cercanos.

Con todo, a fines del primer trimestre y tras haber medido fuerzas al interior del Coena (Consejo Ejecutivo Nacional), la Asamblea General de Arena avaló la candidatura presidencial de Flores. El Diario de Hoy, importante periódico vinculado a los círculos de la derecha política, indicó que el proceso de elección fue el resultado de movimientos intrapartidarios donde «una argolla se madrugó a la otra», aludiendo a que las pretensiones del grupo Cristiani habrían sido frustradas con el audaz lanzamiento de Flores. De lo que no hay dudas es que desde su inicio, éste puso en aprietos cualquier otra iniciativa de candidatura en tanto obligaba a definiciones inmediatas, la disposición a realizar campañas internas en todo el país y a discutir públicamente los proyectos, lo que no ha sido el estilo del partido.

La proclamación del candidato no implicó, empero, una concertación lo suficientemente amplia como para dirimir los conflictos creados. Después de su ratificación, muchos factores inducen a pensar en la poca solidez de los apoyos internos. Entre estos a simple vista se encuentran altos dirigentes del partido –como Cristiani y Oscar Santamaría, canciller en la administración anterior. De igual forma, el proceso de consultas ciudadanas que ha impulsado el candidato después de su ratificación tampoco ha contado con el suficiente respaldo y acompañamiento de la estructura partidaria y, además, ha sido motivo de

resquemores debido a que el equipo de trabajo está formado en su mayoría por personas que no pertenecen a Arena.

Al concluir el mes de septiembre, la lógica de los movimientos electorales al interior del partido de gobierno sigue siendo la misma: un candidato impulsando una especie de precampaña electoral de baja intensidad y aislada del partido, y un partido relativamente escéptico frente a aquél y ocupado en múltiples negociaciones para definir su candidato vicepresidencial. Varios nombres de posibles precandidatos se siguen manejando en el ambiente, unos más y otros menos cercanos a las estructuras partidarias; sin embargo lo que parece claro es que las disputas entre los grupos se trasladaron al escenario de la figura vicepresidencial y que –como no suele ser costumbre– de la misma dependerá el perfil definitivo de la fórmula.

El escenario del FMLN

No hay duda de que en el marco de los movimientos de preparación partidaria para los comicios de 1999, lo que ha dado más noticias ha sido el accidentado proceso de elección de candidatos en el FMLN. que requirió de tres convenciones nacionales para poder concluir.

En términos estrictos, el proceso se inició a fines de mayo con la inscripción de la candidatura de Salvador Arias, economista cercano a algunas organizaciones campesinas vinculadas al Frente. Internamente su candidatura había recibido el apoyo de dos fracciones partidarias, incluida la que corresponde a la vieja militancia del Partido Comunista. Unas dos semanas más tarde se inscribió también como precandidata Victoria de Avilés –hasta marzo procuradora de Derechos Humanos–, quien contó con los mismos apoyos internos y fue promovida por organizaciones de mujeres y del magisterio; al igual que Arias, debió afiliarse al partido para optar a la candidatura. Al final se presentaron a las convenciones no de manera individual, sino como fórmula Avilés-Arias.

Dos candidatos más que se perfilaron desde el inicio fueron Héctor Silva, actual alcalde de San Salvador, y el economista Héctor Dada Hirezi, concejal en el mismo municipio. El primero, entró a competir en la Convención Nacional de mediados de agosto, de la que no surgió ningún ganador, y posteriormente se retiró ante los claros signos de que las candidaturas estaban generando serias fracturas en el FMLN. Así, a la siguiente Convención de fines de agosto organizada para superar el impase se presentó sólo la dupla Avilés-Arias, que sin embargo no pudo obtener siquiera la mayoría simple de los votos –contaron con 423 de más de 860 convencionistas– y la ausencia de candidatos consolidados debió prolongarse hasta la tercera Convención, de fines de septiembre.

En cuanto al segundo potencial candidato, si bien su nombre estuvo presente en el mes y medio y en las tres convenciones, en términos estrictos nunca entró a competir. Dada Hirezi habría planteado una serie de condiciones vinculadas a la

definición de estrategias electorales, lineamientos de programa de gobierno, y términos para coaliciones y formación de gabinete como prerrequisito para lo que a su juicio debía ser una candidatura de coalición y no de un partido. La firma de un protocolo de alianza entre la USC (Unión Social Cristiana) y el FMLN a mediados de junio constituía un paso importante en la dirección propuesta por Dada. Sin embargo, los conflictos internos y diferencias de visión en el FMLN no permitieron avanzar más en la negociación y a cuatro días de la tercera Convención, Facundo Guardado, coordinador general del Frente, y Marta Valladárez (conocida como Nidia Díaz), diputada del partido en la Asamblea Legislativa, decidieron constituir la segunda fórmula de la competencia. La nueva combinación Guardado-Díaz terminó triunfando en la Convención, pero no por ello solventando los ásperos conflictos del FMLN.

En realidad, este proceso de elección en el FMLN se presentó desde su inicio como muy complicado e incierto. Ello por varias razones: en primer lugar por el sensible déficit de dirigentes con perfil de aceptable y viable para los comicios presidenciales, lo que les obligó a buscar figuras externas que debían inscribirse al partido; en segundo lugar por las fuertes disputas de poder interno que en la práctica han enfrentado a dos grupos –más que a dos tendencias ideológicas– de la organización y que encontraron en la definición de los candidatos un nuevo escenario de medición de fuerzas; tercero, por la presencia de un discurso no dominante, pero sí influyente, que sostiene la necesidad de contar con un candidato/a fiel al partido y a sus principios ideológicos independientemente de cuáles puedan ser los resultados de las elecciones de marzo de 1999. Discurso que se enfrentó a la postura mantenida por otro sector según el cual debían buscarse candidatos de consenso que permitieran amplias alianzas electorales y la generación de un bloque con capacidad de gobernar.

Así las cosas, las dificultades para la elección de candidatos sólo fueron la expresión de los múltiples conflictos intrapartidarios entre dos sectores que fueron identificados como los «reformistas» o «moderados» y los «radicales» u «ortodoxos». Los primeros liderados por el coordinador Facundo Guardado y los segundos por Shafick Handal, el más reconocido dirigente comunista dentro del FMLN. Sin embargo, pese a las tipificaciones que aluden a posiciones de identidad política de las partes, un buen segmento de los conflictos coyunturales no radicó en claves ideológicas sino en cálculos y consideraciones de conveniencia partidaria. En su mayoría, pues, se trató de mediciones de fuerzas entre grupos de poder interno y no de debates de razonamientos o argumentaciones ideológicas como algunos pretendieron hacer creer.

Uno de los cálculos y consideraciones pragmáticas en que las partes confrontadas han diferido proviene, curiosamente, de la certeza compartida de que el FMLN tiene las condiciones óptimas para ganar las próximas presidenciales. El dilema planteado al interior del Frente es sencillo: se aprovechan las circunstancias para acceder al poder gubernamental o se hacen esfuerzos por revertir condiciones objetivamente propicias, pero subjetivamente asumidas como inconvenientes.